



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

EXPTE. NRO: 83618/2019

AUTOS: “ROPHE S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación obrante a fs. 1683/1707 contra la Resolución nro. 1792/18 que desestima el recurso de revisión interpuesto contra la resolución dictada por la DV RRES, obrante a fs. 218/15 que impuso una multa al quejoso, en virtud de lo dispuesto por el art. 8º de la Resolución General Nro. 1566 t.o 2010.

Que notificada de ello, se hizo saber a la rubrada, que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 39 bis inc. b) del Decreto Ley 1285/58, conf. Art. 26 de la ley 24.463

Que a fs. 1740, el organismo de recaudación ordenó la remisión de los presentes obrados informando el incumplimiento del requisito de previo pago de la multa impuesta, en los términos del art. 15 de la ley 18.820.

Que la aquí accionante, en su escrito recursivo, plantea la imposibilidad de afrontar el ingreso, refiriendo en tal sentido el inicio de un concurso preventivo.

Que así las cosas en relación al planteo introducido, el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, ello no importa una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), pues existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/Impugnación actas de inspección”, sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV), el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287 consid. 10).

En el mismo orden, si bien el Alto Tribunal admitió la plena operatividad de las previsiones del art. 8 inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, norma sustancialmente análoga al art. 18 de la C.N. señaló que, pese a ello, aquellas no desplazan ni derogan las directivas del art. 15 de la ley 18.820 - del entonces vigente - art. 12 de la ley 21.864 en cuanto establecía la obligación de depositar los aportes omitidos, su – actualización monetaria, recargos e intereses para acceder a la instancia judicial, salvo que el interesado afirme y pruebe que el exigido como depósito previo resulta exorbitante desproporcionado con su concreta capacidad económica. Similar temperamento fue adoptado por el Máximo Tribunal, en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar el art. 15, segunda parte, de la ley 18.820 (ver Fallos 215:225 501 ; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 240; 296:40 57; 307:1753).

Que en consecuencia en tanto en el sub examine no se han objetivado los supuestos que autorizarían eximir al recurrente del depósito previo exigido por los art. 15 de la ley 18.820 y 39 bis del decreto ley 1285/58 sustituido por el art. 26 de la ley 24.463, como requisito para la admisibilidad del recurso deducido, corresponde declarar la inadmisibilidad formal el remedio procesal intentado en virtud de no haberse cumplido lo dispuesto por la normativa legal citada.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

Que no obsta lo expuesto la mera presentación efectuada ante un juzgado Comercial (en el caso, solicitando concurso preventivo de acreedores) pues ello no implica imposibilidad real de afrontar el pago de la deuda requerida como condición para la promoción formal del recurso de apelación, conforme la obligación impuesta por los arts. 15 de la ley 18.820 y 12 de la ley 21.864. A contrario sensu, bastaría que cualquier deudor de los organismos previsionales se ampare en la ley concursal para justificar su incumplimiento (en igual sentido "ACEROS PUESTO VIEJO S.A. c/ D.G.I.", del 26/12/94, Sala III, C.N.A.S.S.; "AGRO INDUSTRIAS S.A. c/ D.G.I.", del 30/12/96, C.F.S.S., Sala II, entre otros).

Por ello lo expuesto el Tribunal **RESUELVE**: 1) Declarar formalmente inadmisibile el recurso interpuesto; y 2) sin costas en la Alzada. Por disposición del Tribunal, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p. 4 y conc.). Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).

Fecha de firma: 01/06/2023

Alta en sistema: 05/07/2023

Firmado por: SEBASTIAN EDUARDO RUSSO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FERNANDO STRASSER, JUEZ DE CAMARA - SUBROGANTE

Firmado por: JAVIER BENITO PICONE, SECRETARIO DE CAMARA



#34047394#370176707#20230524103837288